

Crónica del mes

Noviembre-Diciembre

El último bimestre de 1989 —el último bimestre, también, de la década— ha estado cargado de acontecimientos trágicos. La masacre de FENASTRAS, perpetrada el 31 de octubre (ver Crónica de octubre) fue sólo el preludio de una coyuntura en la cual la violencia de todo tipo ha alcanzado una de sus cotas más altas en toda la década. La ofensiva del FMLN fue pretexto para una contraofensiva brutal que no sólo golpeó a la UCA, sino que ha cerrado considerablemente los espacios democráticos que el movimiento popular había conquistado penosamente a lo largo de muchos años.

Los cadáveres de los sindicalistas fueron velados la noche del 31 de octubre frente a la sede destruida de FENASTRAS. El 1 de noviembre fueron trasladados a la Plaza Cívica, donde se celebró un acto ecuménico organizado por el Comité Permanente del Debate Nacional. El sepelio se llevó a cabo el 2 de noviembre. Los cadáveres fueron conducidos al cementerio por cuatro mil personas, entre las cuales se contaban numerosas delegaciones de sindicatos y de organizaciones religiosas y humanitarias del exterior. Tanto durante la vela como durante el sepelio, algunos sindicalistas detuvieron, ante las cámaras de la prensa y de la televisión, a unos 16 efectivos de la Fuerza Armada, vestidos de civil, quienes aseguraron que pasaban “casualmente” por el lugar.

La Fuerza Armada negó toda responsabilidad institucional en el atentado. Más aún, el COPREFA afirmó cínicamente que “estas organizaciones de fachada del FMLN han emprendido una nueva táctica por medio de la cual se están atacando entre sí por motivos que se ignoran.” El comandante de la Primera Brigada de Infantería, coronel Francisco Elena Fuentes, afirmó que “para nadie vinculado con los grupos de masas es un secreto que en el interior de FENASTRAS se almacenaban explosivos.”

Por su parte, en un mensaje difundido la noche del 31 de octubre, el presidente Cristiani condenó el ataque del FMLN contra el Estado Mayor, ocurrido el día anterior, y calificó de “actos igualmente deplorables” los atentados contra las sedes de COMADRES y FENASTRAS. “Creemos —indicó— que (tales hechos) se están dando con el objetivo de entorpecer el proceso de paz que se ha iniciado en nuestro país.” A la vez, expresó su voluntad de “investigar a fondo estos hechos” incluso “trayendo expertos para que nos ayuden de una vez por todas a dar con los culpables, y que esos culpables reciban todo el peso de la ley.” Pocos días después, el 3 de noviembre, Cristiani anunció que integraría una comisión investigadora del atentado y que, a tal efecto, había invitado a la ONU, a la OEA, a la conferencia episcopal, a los partidos políticos, a dos organizaciones sindicales, entre ellas FENAS-

TRAS, al fiscal general, al ministro de justicia y al rector de la UCA. El embajador norteamericano, William Walker, manifestó estar "profundamente conmovido y perturbado" por el atentado y exhortó "a redoblar esfuerzos para terminar con este conflicto por medio del ya iniciado proceso de diálogo." El Departamento de Estado indicó que "estos actos irracionales únicamente sirven a los intereses de las extremas que no desean la democracia ni la reconciliación nacional." El propio subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, Bernard Aronson, hizo una rápida visita al país para evaluar la situación.

Por su parte, en un comunicado difundido el 1 de noviembre, el FMLN denunció que el atentado "fue planificado por el coronel René Emilio Ponce, contó con el aval del presidente y fue ejecutado por el coronel Elena Fuentes." El 2 de noviembre, anunció oficialmente su decisión de suspender el proceso de diálogo hasta que el gobierno diese pruebas concretas de cesar la represión contra los sectores populares y llevase a juicio a los responsables del atentado contra FENASTRAS.

La decisión insurgente fue controvertida. El dirigente de la UNTS, Humberto Centeno, manifestó que la misma era "una respuesta lógica y correcta, porque el gobierno le ha declarado la guerra a los trabajadores y no al FMLN... ¿qué más nos queda? Sólo falta que nos pasen los tanques encima en las calles. Hemos sido atacados y nosotros los trabajadores no hemos asesinado a nadie, sino que hemos debatido políticamente y exigido nuestras necesidades básicas al gobierno." Orlando Arévalo, de la UNOC, se preguntó si valía la pena mantener el diálogo "mientras se está asesinando al pueblo."

El coordinador del Comité Permanente del Debate Nacional, Reverendo Edgar Palacios, lamentó la decisión del FMLN, y advirtió que "si la puerta del diálogo y la negociación se cierra, la puerta de la guerra se abrirá." Monseñor Rivera, al término de su homilía del 4 de noviembre, estimó que la ruptura del diálogo era un "retroceso."

El 3 de noviembre, el portavoz del Departamento de Estado calificó de "cínica" la decisión guerrillera. El mismo día, el presidente Cristiani rechazó "las irresponsables y maliciosas acusaciones hechas por el FMLN en el sentido de que la acción criminal hubiera sido realizada por la Fuerza Armada y con el conocimiento y autorización del presidente de la República;" y reiteró la disposición del gobierno a reunirse en Caracas, según el calendario acordado en la reunión previa de San José. También ese día, el presidente Oscar Arias informó que se había comunicado con Carlos Andrés Pérez para aunar esfuerzos y "convocar a las partes para que mantengan su disposición al diálogo." Con todo, Arias admitía que "quizás éste no es el mejor momento para reanudar las conversaciones."

De hecho, el ataque del 30 de octubre contra el Estado Mayor dio inicio a la campaña militar del FMLN, denominada "Todos al tope contra ARENA y la tandoná." El 1 de noviembre, comandos urbanos atacaron con cohetes anti-tanque del tipo *Low* las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería. Los atacantes dispararon dos proyectiles a unos 200 metros de la entrada principal de la guarnición. Empero, los proyectiles hicieron blanco en un jeep del arquitecto Hermógenes Martínez, quien pasaba en ese momento por el lugar, destruyéndolo por completo. Martínez murió poco después de ser trasladado al Hospital Rosales. También resultó herida una vendedora ambulante que pasaba por el lugar.

El día 2, un par de guerrilleros que colocaban un artefacto explosivo en una caja telefónica fueron sorprendidos por un agente de la Policía Nacional, contra quien abrieron fuego, causándole la muerte, pero al mismo tiempo hirieron a un obrero de la construcción que laboraba en las cercanías. El día 3, la residencia del coronel Orlando Carranza, comandante del batallón Belloso, fue objeto de dos fuertes explosiones que causaron daños de consideración al inmueble y a dos vehículos. El coronel Carranza responsabilizó del atentado al FMLN, y afirmó que "éste es un ataque alevoso que mi familia no tiene por qué

pagar." El día 6, comandos guerrilleros atacaron un retén policial, utilizando nuevamente cohetes *Low*, los cuales hicieron impacto en un vehículo de la Policía Nacional, causando heridas en un agente de ese cuerpo de seguridad.

El clima político-militar mostraba que se avecinaba una crisis de singulares proporciones. El 8 de noviembre, en Managua, el comandante Leonel González advirtió: "vamos a implementar todas las modalidades y tácticas de nuestra estrategia militar. Vamos a quebrarle su tesis al gobierno de que el FMLN está en el proceso de diálogo porque está débil militarmente." En la mañana del sábado 11, comandos urbanos lanzaron cuatro artefactos explosivos contra el cuartel central de la Guardia Nacional. Según fuentes castrenses, en el ataque murieron dos menores de edad y resultaron heridas otras ocho personas, quienes se encontraban en las cercanías del lugar. Asimismo, resultaron heridos tres agentes de ese cuerpo de seguridad. En la noche de ese mismo día, el FMLN desató "la ofensiva."

El FMLN denominó a la ofensiva "Fuera los fascistas. Febe Elizabeth vive." Fue su mayor ofensiva militar en los diez años de guerra. Esa misma noche del 11 de noviembre, el gobierno impuso un estricto bloqueo en las fuentes informativas independientes a través de una cadena de radio y televisión, controlada por el Centro de Información Nacional (CIN). Al día siguiente, decretó estado de sitio y toque de queda en todo el territorio nacional.

El FMLN inició la ofensiva con ataques simultáneos a posiciones militares ubicadas en siete ciudades, incluyendo la capital. En San Salvador, atacó la residencia presidencial, la casa particular del presidente Cristiani —quien se encontraba en Coatepeque y a quien la Fuerza Armada no le informó que esperaba una ofensiva guerrillera de envergadura— y las del presidente y vicepresidente de la asamblea legislativa. Al mismo tiempo, otros grupos guerrilleros atacaron posiciones militares cercanas al Estado Mayor de la Fuerza Armada, en lo que radio Venceremos describió como un "operativo de avance" hacia

las instalaciones del Estado Mayor.

Combatieron simultáneamente en las colonias militares "Manuel José Arce" y Palermo; en las colonias San Joaquín, La Rábida, La Campiña; y en las localidades de Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, San Marcos, San Martín, Santo Tomás, Ilopango, San Jacinto y San Ramón, todos municipios del departamento de San Salvador, habitados en su mayoría por obreros y empleados. Otros combates se desarrollaron en Antiguo Cuscatlán (La Libertad), y en los sectores de Ciudad Merliot y Santa Tecla, donde el FMLN atacó la academia de seguridad pública. En Usulután, atacó las instalaciones de la Sexta Brigada de Infantería y la base militar "El Manguito." En San Miguel, atacó la Tercera Brigada de Infantería, así como el hotel *Trópico Inn*, donde se encontraba el vicepresidente Francisco Merino, quien fue evacuado del lugar. Asimismo hubo combates en las ciudades de Zacatecoluca (La Paz), Tejutepeque (Cabañas), Chalatenango, San Vicente, San Francisco Gotera (Morazán) y Santa Ana.

Desde el primer momento, el FMLN ocupó posiciones en los municipios de Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, Mejicanos y Ayutuxtepeque, todos del departamento de San Salvador, y en varias colonias populares de las ciudades de San Miguel y Zacatecoluca. En algunos casos, los guerrilleros obligaron a los vecinos a que les abrieran las puertas de sus viviendas, y desde ellas atacaron a las tropas gubernamentales. La noche del 11, a través de la cadena de radio, el CIN aseguró que la situación ya estaba bajo el control de la Fuerza Armada. De hecho, la ofensiva apenas empezaba.

Los combates se prolongaron a lo largo del día 12 sin que las tropas del gobierno logran desalojar al FMLN. El CIN adujo que la Fuerza Armada no deseaba causar víctimas entre los civiles que habían sido tomados como rehenes por la guerrilla. El jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, explicó que "es muy difícil combatir en zonas urbanas."

El día 13, la Fuerza Armada empezó a dar

muestras de impaciencia e inició bombardeos sobre las zonas ocupadas por la guerrilla. El FMLN respondió con fuego de fusilería y ametralladoras. Más tarde, el mismo día, ofreció una tregua para auxiliar a la población civil; el ejército desconoció tal ofrecimiento y continuó desarrollando su contraofensiva. El parte de guerra dado a conocer al final de ese día por radio Venceremos daba cuenta de un total de 650 bajas en las filas castrenses, entre muertos y heridos, y 20 vehículos blindados, 6 helicópteros y 7 radio patrullas destruidas; el ejército, por su lado, informó haber causado 220 muertos y 136 heridos al FMLN.

Las acciones continuaron sin mayores cambios el día 14 hasta la una y media de la tarde, cuando tres aviones *Push and pull* y un avión A-37 reanudaron los bombardeos y ametrallamientos en los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque y Soyapango. Según la información difundida por *Newsweek*, los aviones bombardearon desde unos dos mil pies, para evadir la fusilería antiaérea del FMLN, lo cual implicaba que los bombardeos difícilmente podían ser selectivos. No obstante, el presidente Cristiani y el Alto Mando negaron sistemáticamente que la Fuerza Aérea estuviese efectuando bombardeos indiscriminados. Voceros castrenses aseguraron que el ejército "actúa lenta y cuidadosamente para proteger a la población civil. No usamos artillería."

En la noche del miércoles 15, la Fuerza Armada empezó a desesperarse porque aún no controlaba la ofensiva. En una reunión celebrada hacia las diez de la noche, en medio de un clima psicológico depresivo, el Alto Mando y los principales comandantes del ejército convinieron en que se estaban jugando el todo por el todo y decidieron asumir medidas más drásticas para detener al FMLN. Entre otras cosas, se discutió la necesidad de descabezar a la "subversión." Esa noche, la Fuerza Armada recrudesció sensiblemente sus bombardeos. También fue la noche en que el director de la Escuela Militar, coronel Guillermo Benavides, ordenó la masacre de los jesuitas de la UCA.

A pesar de la enérgica contraofensiva castrense, los combates continuaron en la colonia Zacamil, así como en Soyapango y en la finca *El Espino*, ubicada en Santa Tecla, donde, el 15, el FMLN atacó por segunda vez la academia de seguridad pública, mientras colocaba barricadas sobre la carretera Panamericana en un intento por cortar el acceso a la capital. El viernes 17, el FMLN empezó a replegarse fuera del perímetro de San Salvador. Durante los cuatro días comprendidos entre el 17 y el 20, las acciones bélicas experimentaron una sensible disminución, limitándose fundamentalmente a combates de encuentro de poca duración, producidos por el constante movimiento de ambos bandos sobre territorios comunes. Según fuentes castrenses, el 17 se combatió en Concepción Quezaltepeque y en Comalapa, así como en las afueras de Zacatecoluca (La Paz) y en la ciudad de San Miguel, donde un avión A-37 cayó a tierra mientras el ejército trataba de rechazar los ataques del FMLN. La capital continuó siendo escenario de enfrentamientos armados aunque de menor alcance que los registrados en los días previos. Las acciones más relevantes ocurrieron los días 17 y 21, en los municipios de Soyapango, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque. El 21 de noviembre, un portavoz de la comisión político-diplomática del FMLN afirmó en Londres que el aparente cese de los combates obedecía a la adopción de una nueva táctica guerrillera consistente en una "guerra móvil" en la capital. Según el portavoz, el FMLN se disponía a lanzar ataques en barrios residenciales como las colonias Escalón y San Benito.

En efecto, ese día se reanudaron las acciones de gran escala, cuando el FMLN ocupó posiciones en viviendas particulares de la colonia Escalón. Su acción de mayor alcance fue, sin embargo, la toma del *Hotel Sheraton*, donde se encontraban alojados el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, diplomáticos de varios países, huéspedes particulares y doce "boinas verdes" norteamericanos. Las unidades rebeldes burlaron el cerco del ejército y penetraron a las instalaciones del hotel, tomando posiciones en

una sección de éste conocida como torre "VIP," desde donde francotiradores mantuvieron a raya a las tropas gubernamentales.

El gobierno acusó al FMLN de intentar secuestrar a Baena Soares, versión que el Frente desmintió categóricamente y que, de hecho, el propio Baena Soares no confirmó. Todos los huéspedes del hotel fueron desalojados durante la mañana del mismo día, a excepción de los militares norteamericanos, quienes se encontraban fuertemente armados y prefirieron permanecer en sus habitaciones resistiendo cualquier posible intento de los insurgentes para aprehenderlos. Durante la noche, los rebeldes abandonaron el hotel, rompieron el cerco del ejército, y se replegaron a través de las quebradas adyacentes. Un diplomático europeo citado por *Newsweek* (27 de noviembre) comentó, en relación a la habilidad del FMLN para replegarse a través de los cercos militares, que "el ejército ha sido humillado. Los han dejado como unos completos idiotas, desde el punto de vista militar."

El mismo día, otra columna guerrillera penetró en las instalaciones del club de golf *Campestre*, ubicado también en la colonia Escalón, e incendió sus instalaciones. Simultáneamente, hubo enfrentamientos en los alrededores de San Vicente, Zacatecoluca y Metapán (Santa Ana).

El día 22, en un intento por desescalar la actividad bélica, el FMLN anunció su disposición a un cese al fuego inmediato verificado por las Naciones Unidas. El presidente Cristiani, sin embargo, rechazó la propuesta por considerarla carente de seriedad. El 23, la Fuerza Armada informó de fuertes operativos de rastreo en el área sur del volcán de San Salvador, asimismo afirmó haber causado 1,576 muertos al FMLN y requisado 678 fusiles, 11 carabinas, 14 escopetas, 111 lanzagranadas, 34 morteros, 19 ametralladoras, 27 subametralladoras, 50 armas cortas, 21 radios de comunicación y gran cantidad de munición y material explosivo. Reconoció haber sufrido un total de 352 bajas mortales en sus propias filas. A esa altura, la cifra de víctimas civiles ascendía ya a unos 1,500 entre muertos y

heridos. El estimado de viviendas dañadas durante los combates asciende a unas 20 mil.

El sábado 25, se precipitó a tierra, en el área de El Tránsito (Usulután), una avioneta de matrícula nicaragüense, cargada con armamento sofisticado destinado al FMLN. Según fuentes castrenses, la avioneta transportaba 24 misiles tierra aire SAM-7, un misil *Red eye* y un cañón anti-tanque de 75 mm. En el accidente murieron tres de sus cuatro tripulantes. El cuarto se habría suicidado ante la inminencia de su captura. Otra avioneta, que a juicio del ejército también transportaba armamento para el FMLN, fue encontrada incinerada en las inmediaciones del cantón El Despoblado (La Paz), pero en este caso su cargamento ya había sido evacuado del lugar. El 26 de noviembre, el presidente Cristiani, motivado por el incidente de la avioneta, anunció la suspensión de relaciones diplomáticas, comerciales y de cualquier otro tipo con el gobierno de Nicaragua. Pocos días después, el 30 de noviembre, la comandancia general del FMLN anunció su disposición para proveerse de armamento "por todos los medios," si bien ofreció "no emplear los misiles tierra-aire si la Fuerza Aérea cesa totalmente sus bombardeos y ametrallamientos en todo el territorio nacional."

El 29 de noviembre, el FMLN volvió a incursionar en las colonias Escalón, Maquilishuat, San Benito y Lomas de San Francisco, provocando enfrentamientos con el ejército que se prolongaron por más de 24 horas. También hubo nuevos combates en los municipios de Mejicanos, Soyapango e Ilopango; y en las periferias de Usulután, San Miguel, Santa Ana y Nueva Concepción (Chalatenango).

Según un balance de la ofensiva, difundido por radio Venceremos el 4 de diciembre, en 23 días de combates el FMLN habría ocasionado al ejército 465 muertos y 1,395 heridos. Asimismo, el FMLN habría destruido 25 unidades blindadas y de transporte del ejército y su fuego antiaéreo alcanzado 23 aeronaves de la Fuerza Armada. Por su parte, el COPREFA aseguró que, durante el mismo período, el ejército causó al FMLN 1,853

mueritos y 1,183 heridos. La Fuerza Armada admitió en sus filas 457 bajas mortales y 1,341 heridos. Por otro lado, informó que le había incautado al FMLN más de 900 fusiles de diverso calibre —la mayoría de ellos del tipo AK-47 y *Dragonov*— 147 lanzagranadas y abundante material explosivo y municiones.

Según se ha apuntado más arriba, la masacre de los jesuitas de la UCA aconteció en el momento más álgido de la ofensiva. Este no fue un hecho aislado. La Fuerza Armada visualizaba aquel momento como un instante de definición, no sólo de la ofensiva, sino de la guerra misma.

Por otra parte, con la masacre de la UCA culminó una campaña sistemática de amenazas, calumnias y ataques, verbales y materiales, contra la universidad y, particularmente, contra su rector, el P. Ellacuría. Tales amenazas y ataques no provenían del FMLN, sino de sectores de la ultraderecha y de ciertas facciones de la Fuerza Armada (Ver *Proceso* 409).

Ya al día siguiente de la masacre, Monseñor Rivera indicaba: "Ha habido una animadversión sobre el trabajo de los jesuitas como analistas y gente de ciencia que trataba de hacer ver la situación del país y del conflicto, y en los últimos tiempos ellos insistían en la necesidad de la negociación. A mí me consta que muchas veces hubo intentos de quererlos expulsar del país y algunas veces se habló de quererlos desaparecer. Han tratado de aprovechar esta circunstancia (la ofensiva del FMLN) para hacerlos desaparecer." En su homilía dominical del 19 de noviembre, Monseñor insistió en la misma idea: "No cabe duda que tan nefanda acción había sido decidida con antelación y preparada por la irresponsable campaña de acusaciones y calumnias —sobre todo en algunos medios impresos— contra varios de los distinguidos académicos de la UCA que ahora ya están muertos; tales acusaciones y calumnias envenenaron las mentes y terminaron armando los brazos asesinos."

Los antecedentes de esta campaña se remontan casi hasta comienzos de la década de 1970, pero el odio que la ultraderecha profesaba a la

UCA fue aumentando, sobre todo a lo largo de la década de 1980. En tiempos recientes, los detractores de la UCA se envalentonaron al recibir el aval de más de un eclesiástico.

En una larga entrevista publicada en la revista *Análisis* (8, Agosto-septiembre de 1988), el obispo de Santa Ana, Monseñor Marco René Revelo, acusó al P. Ellacuría y a otros jesuitas de la UCA de haber manipulado a Monseñor Romero. A finales de 1988, circuló profusamente en los círculos de la ultraderecha el opúsculo de Monseñor Fredy Delgado, *La Iglesia popular nació en El Salvador*, en el cual se ampliaban los juicios vertidas por Monseñor Revelo en *Análisis*. Algunos meses más tarde, *El Diario de Hoy* denunció presuntas amenazas de muerte de la UCA contra Monseñor Delgado en represalia porque éste habría revelado cómo fue manipulado Monseñor Romero por un "grupo de curas comunistas encabezados por dos conocidos jesuitas hoy enquistados en la UCA" (*El Diario de Hoy*, 21 de marzo de 1989, p. 3). La campaña de ataques arreció tras el triunfo electoral de ARENA en las elecciones presidenciales de marzo de 1989.

El 13 de abril y en días subsiguientes, el Partido ARENA y el Estado Mayor de la Fuerza Armada, a través de campos pagados, acusaron al P. Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), de justificar "los actos terroristas del FMLN" (*El Diario de Hoy*, 13 de abril de 1989, p. 14; *El Diario de Hoy*, 16 de abril, p. 13). Pocos días después, el 19 de abril, comandos urbanos de las FAL asesinaron al Fiscal General de la República, Dr. Roberto García Alvarado. En declaraciones formuladas ese mismo día, el entonces comandante de la Primera Brigada de Infantería y actual viceministro de defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, acusó públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones donde se había planificado el asesinato del fiscal (*El Diario de Hoy*, 20 de abril de 1989, p. 2). Apenas una semana después de las acusaciones del coronel Zepeda, en la madrugada del 29 de abril, las instalaciones de la

imprensa de la UCA fueron víctimas de un ataque con dinamita, que *El Diario de Hoy* describió como “bombas menores que no hacen ningún perjuicio sustancial, o que simplemente no estallan, pero que se prestan para ‘fabricar mártires’ y justificar posteriores terrorismos” (*El Diario de Hoy*, 4 de mayo de 1989).

Pocos días después, el 7 de mayo, el coronel Zepeda juramentó a un primer contingente de las autodenominadas “defensas civiles patrióticas,” entre cuyos miembros se contaban varios colaboradores del *El Diario de Hoy*. La iniciativa del coronel Zepeda tuvo una existencia efímera debido al repudio generalizado que encontró de parte de todos los sectores democráticos del país. Incluso el presidente Duarte manifestó su preocupación al “ver en televisión a gente que ha hablado de matar y aniquilar, ahora uniformada, con rifle e integrada a fuerzas paramilitares. Esto puede generar una estructura de escuadrones de la muerte” (*El Mundo*, 12 de mayo de 1989, p. 2).

El 30 de junio, el Lic. Edgar Chacón, presidente del autodenominado Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) e integrante del contingente de patrulleros juramentados por el coronel Zepeda, fue acribillado a balazos por presuntos comandos urbanos de la guerrilla. Menos de 72 horas después del hecho, el día 3 de julio, en carta abierta dirigida al presidente Cristiani, la Cruzada Pro-Paz y Trabajo demandó la captura y condena en juicio sumario de los padres Ignacio Ellacuría y Segundo Montes “porque son responsables de toda la destrucción de la infraestructura y de todos los viles y cobardes asesinatos que han cometido en nombre de la teología de la liberación” (*El Diario de Hoy*, 3 de julio de 1989, p. 39). Un día después, el Viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Montano, acusó a la UCA de valerse de espacios pagados “para tratar de desprestigiar a la seguridad pública y a la Fuerza Armada” (*El Diario Latino*, 4 de julio de 1989).

El 19 de julio, el Ing. Gabriel Payés, amigo también del coronel Zepeda y colaborador del IRI, fue acribillado a balazos por presuntos co-

mandos urbanos. Al día siguiente, el autodenominado Comité Pro Rescate de la Universidad de El Salvador denunció públicamente la “infiltración comunista” en la UCA y acusó a los jesuitas que trabajaban en la universidad de justificar “con disimulo” los asesinatos contra los ideólogos de la derecha (*El Diario de Hoy*, 21 de julio de 1989, p. 45). Menos de 48 horas después, en la madrugada del 22 de julio, la imprenta de la UCA sufrió el más potente y destructivo ataque con dinamita de la década. Los atacantes, quienes dejaron huellas de botas militares en las inmediaciones de la imprenta, colocaron siete bombas. Dos de ellas estallaron dentro de los talleres, dañando el equipo de computación, levantadoras de texto, fotocopiadoras, mobiliario de oficina y la infraestructura del edificio, más buena parte de archivos, textos, programas y materiales en procesamiento. Otra bomba estalló en el transformador de energía eléctrica que abastecía a la imprenta, y una última debajo de un autobús de la UCA. Las tres restantes fueron desactivadas en la mañana siguiente por técnicos de la Fuerza Armada.

El 21 de agosto, el viceministro de seguridad deploró que los espacios noticiosos de la televisión se saturasen con las presentaciones de “individuos plenamente identificados con los movimientos subversivos, como el jesuita Ignacio Ellacuría” (*El Diario de Hoy*, 22 de agosto de 1989, p. 3).

El 11 de noviembre, el FMLN inició su ofensiva. A partir de las diez de la noche, el gobierno encadenó a todas las emisoras del país a la radio Cuscatlán. Los responsables de la cadena permitieron y aun alentaron que salieran al aire amenazas de muerte contra los jesuitas de la UCA, así como contra Monseñor Rivera y Monseñor Rosa Chávez. El propio Vicepresidente de la República y Ministro del Interior, Francisco Merino, acusó al P. Ellacuría de haber “envenenado las mentes” de la juventud salvadoreña a través del Externado y de la UCA.

La noche del lunes 13 de noviembre, un contingente del batallón Atlacatl, comandado por

el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, ingresó con lujo de fuerza a la residencia de los jesuitas. Los efectivos saltaron el muro del campus universitario y arremetieron a patadas contra las puertas del Centro Monseñor Romero, junto a la residencia de los padres. El P. Juan Ramón Moreno, uno de los jesuitas que sería asesinado 48 horas después, les ofreció abrir las puertas para que entraran sin necesidad de derribarlas. A diferencia de anteriores cateos, los efectivos no prestaron mayor atención a los libros, archivos ni a los materiales escritos; se concentraron en observar la disposición de los corredores y habitaciones, los lugares de acceso y las personas. Conociendo los sucesos posteriores, es claro que se trataba de un cateo de reconocimiento del terreno. Los jesuitas de la residencia, desgraciadamente, no lo interpretaron así. Por el contrario, el propio P. Ellacuría estimó que ahora podían estar más seguros, porque ya el ejército se había dado cuenta de que no ocultaban nada "subversivo."

El P. Ellacuría acababa de retornar de Europa esa tarde. Durante su estadía en Alemania había hablado ante el parlamento en Bonn y ofrecido un ciclo de conferencias en diversas universidades. En Salamanca había sido electo, por unanimidad, presidente del consejo superior universitario de la Universidad Iberoamericana de Postgrado, integrada por 80 universidades de España y América Latina. En Barcelona había recibido el premio "Alfonso Comín." Sus amigos europeos le desaconsejaron hasta el último minuto que regresara a El Salvador en la coyuntura de la ofensiva. Valiente y sereno, decidió retornar al país, mientras otras figuras políticas y sindicales de la oposición buscaban asilo diplomático y tomaban precauciones para salvar la vida.

En esta edición de *ECA* se presenta una reconstrucción de la masacre a partir de las confesiones de los asesinos y de las declaraciones de diversos testigos presentes en las inmediaciones de la UCA en esa madrugada.

La masacre suscitó un estupor descomunal en los más diversos sectores. Entre todas las condenas formuladas, quien mejor recogió las pri-

meras impresiones ante el crimen fue el embajador norteamericano, William Walker: "Me resulta difícil imaginar qué tipo de bestia podría asesinar a sangre fría a seis sacerdotes y otras víctimas inocentes. Este es un acto criminal de tal repugnancia que decir que lo condenamos y deploramos resulta inadecuado. Este hecho ha sido un acto execrable que no solamente ha traído vergüenza a El Salvador sino que también dejará un enorme vacío en la comunidad académica e intelectual de este país" (*La Prensa Gráfica*, 17 de noviembre, p. 21).

La esquila oficial de la Fuerza Armada calificó el asesinato de "criminal acción terrorista" y de "infame e irracional crimen que ha venido a enlutar la cultura de nuestra patria." El CIN lo describió como hecho "salvaje e irracional" y "acción que traspasa los límites de la razón y de la moral." El Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de ARENA habló de "bestial asesinato." La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) formuló una "enérgica condena" por dicho "acto irracional," "ataque execrable," "masacre sin sentido," "condenable desde todo punto de vista, porque las ideas se combaten con ideas y no con balas" (*La Prensa Gráfica*, 17 de noviembre, p. 29). La Federación de Entidades Privadas de Centro América y Panamá (FEDEPRICAP) lo condenó como "incalificable asesinato."

Un aluvión de mensajes de todo el mundo repudiando el crimen y solidarizándose con la Compañía de Jesús y con la UCA empezó a llegar a la curia provincial jesuítica y a la universidad. El bloqueo informativo ejercido por el CIN sobre los medios de prensa nacionales y los servicios internacionales de cable, sin embargo, apenas dejó resquicio para algunos de estos mensajes.

La solidaridad del Papa fue particularmente solícita. En su mensaje personal al arzobispo de San Salvador, el Santo Padre manifestaba estar "profundamente apesadumbrado" por la "triste noticia del bárbaro asesinato" y comunicaba a los familiares de las víctimas por medio del ar-

zobispo su "vivo dolor por este acto de execrable violencia." En otro mensaje, enviado al Prepósito General de la Compañía de Jesús, el Pontífice le comunicaba su "inmensa pena y viva participación en el dolor de toda la Compañía de Jesús" por el "horrible asesinato."

Significativamente, en este contexto de repudio generalizado a la masacre, los méritos intelectuales de los asesinados, que tantas veces suscitaron el vituperio de quienes se sentían cuestionados por los análisis de la UCA, e impotentes para rebatirlos académicamente, fueron objeto, repentinamente, de las más inesperadas alabanzas y reconocimientos. La esquila de pésame personal publicada por el presidente Cristiani y su esposa calificaba a la UCA de "prestigiosa institución." La esquila oficial de la Fuerza Armada manifestaba que el asesinato de los jesuitas "ha venido a enlutar la cultura de nuestra patria." En la misma línea, también los partidos ARENA, MAC y PCN afirmaron que la masacre ha enlutado a "la intelectualidad de la nación." El Ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios, manifestó que constituía un golpe a la "intelectualidad del pueblo salvadoreño" (*Diario Latino*, 20 de noviembre de 1989, p. 4). La ANEP se refirió a la UCA como "uno de los más importantes centros académicos del país" (*La Prensa Gráfica*, 17 de noviembre, p. 29). El CIN calificó el hecho como un "artero crimen que ha golpeado en lo más profundo de uno de los centros universitarios de mayor prestigio en Centroamérica;" caracterizó a los jesuitas asesinados como "distinguidos académicos" y recogió de la cadena ECO (México) sus valoraciones sobre el "prestigio intelectual y la amplia labor académica desplegada por el doctor Ellacuría y sus compañeros de trabajo" y sobre el reconocimiento de que el rector de la UCA gozaba "por su amplia labor académica desplegada tanto en El Salvador como en España y otros países europeos" (*El Mundo*, 16 de noviembre, p. 3). Sectores que siempre rechazaron visceralmente los planteamientos del P. Ellacuría, ahora alababan "la lógica y la claridad en sus exposiciones ante los graves problemas del país y las posibles soluciones

que planteaba" (*La Prensa Gráfica*, 18 de noviembre, p. 27).

El presidente Cristiani se comprometió a impulsar una seria investigación de la masacre. "Nosotros nos hemos comprometido —indicó— a investigar a fondo ese caso y castigar a los culpables, sean quienes sean. Vamos a perseguir a esos grupos asesinos para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos" (*La Prensa Gráfica*, 17 de noviembre, p. 21; 20 de noviembre, p. 11). A tal efecto, solicitó la colaboración del FBI, de Scotland Yard y de las policías española y canadiense, para asesorar a la Comisión investigadora de hechos delictivos. También el Ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios, aseguró que la Fuerza Armada estaba dispuesta a "profundizar en nuestras investigaciones a efecto de que más temprano podamos encontrar a los responsables y aplicar el castigo que merecen" (*Diario Latino*, 20 de noviembre, p. 4).

El gobierno norteamericano se apresuró a tomarles la palabra. "Esperamos que el gobierno de El Salvador conducirá una investigación completa e imparcial," expresó el 17 de noviembre la portavoz del Departamento de Estado. El embajador Walker, en particular, se mostró bastante decidido a esclarecer el caso, no sólo por razones de justicia, sino también para reivindicar un poco de credibilidad al maltrecho "proceso democrático." "Quienquiera que fuese el hechor de este crimen, sea de izquierda o de derecha, está haciendo el trabajo del FMLN. Son traidores a su patria, ya que al cometer estos actos de traición, hacen un gran perjuicio al proceso democrático y dañan la causa del gobierno electo constitucionalmente" declaró Walker (*La Prensa Gráfica*, 17 de noviembre, p.21).

El 17 de noviembre, los presidentes demócratas de los subcomités de asignaciones de ambas cámaras del Congreso norteamericano amenazaron con recortar la ayuda militar si no se investigaba a fondo el asesinato. El representante David Obey, presidente del subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes, advirtió que si el gobierno salvadoreño "no lleva ante la

justicia a los responsables de los crímenes no tendremos más remedio que recortar severamente la ayuda el próximo año." En términos similares se expresó el senador Patrick Leahy, presidente del subcomité de asignaciones del Senado. El senador Christopher Dodd, presidente del subcomité para América Latina de la comisión de relaciones exteriores del senado, aseguró que había unos 300 congresistas dispuestos a suspender la ayuda "si (Cristiani) pierde el control, si no tiene el control político, si gobierna el país sin ejercer el poder."

El día 20, la Cámara de Representantes rechazó, por 215 contra 194 votos, la introducción de una iniciativa de Obey, quien proponía retener hasta el 1 de abril de 1990 un 30 por ciento de los 85 millones de dólares asignados a El Salvador a través de la Ley de asistencia externa. La votación tuvo lugar horas después que Bush conversara con Cristiani y éste le asegurara que la Fuerza Armada no estaba comprometida en la masacre de los jesuitas. "He estado en contacto con el presidente Cristiani en el curso de las últimas 48 horas, para expresarle nuestra intensa condena por los asesinatos, y le expresé que se debe ir al fondo de las cosas, como estoy convencido que lo hará," expresó Bush. Bush arguyó que "no es el momento de dejar solo al presidente Cristiani... no es ahora el momento para socavar a una democracia frágil que está siendo atacada."

No obstante, al día siguiente, la Cámara aprobó una resolución expresando "inequívocamente" que si el gobierno salvadoreño no procesa a los asesinos "el Congreso revisará cuidadosamente y estudiará el tema de la asistencia a El Salvador." También el senado aprobó una resolución de carácter obligatorio en la que advertía que reconsideraría el asunto de la ayuda si el gobierno de Cristiani no investigaba eficazmente el asesinato de los jesuitas. El senador Dodd expresó que "los militares y aquéllos que estén comprometidos en algunas de estas acciones de violencia deberían entender que no vamos necesariamente a escribir un cheque en blanco a perpetuidad, y es de extrema importancia que el Presidente Cristiani entienda esto."

Pese a todas las evidencias circunstanciales, ciertos sectores se empeñaron en atribuir la masacre al FMLN. El propio canciller de la república, Dr. José Manuel Pacas Castro, interpretó el asesinato como "un acto desesperado de la izquierda" (*El Diario de Hoy*, 17 de noviembre de 1989, p. 5), mientras que el vicecanciller Ricardo Valdivieso manifestó que "el FMLN busca hacerle más difícil la situación al gobierno con el asesinato de los seis padres jesuitas" (*La Prensa Gráfica*, 18 de noviembre de 1989, p. 25). El CIN expresó que "este asesinato masivo inalficible y artero se realizó para tratar de desestabilizar el proceso democrático y aumentar más el clima de zozobra y angustia creado por el FMLN contra la ciudadanía salvadoreña" (*El Mundo*, 16 de noviembre, p. 3).

En apoyo de esta interpretación descabellada, ciertas versiones periodísticas aducían que "en los últimos días, el sacerdote Ellacuría había volcado sus opiniones en favor de las medidas económicas y políticas del gobierno" (*La Prensa Gráfica*, 18 de noviembre, p. 27). Incluso se afirmó que su asesinato obedecía a una purga "entre los grupos terroristas entre sí," al igual que el atentado contra FENASTRAS. En resumidas cuentas, el FMLN habría asesinado al P. Ellacuría "porque en los últimos tiempos se había intensificado un vínculo de amistad, respeto y ayuda mutua" entre él y Cristiani (*La Prensa Gráfica*, 17 de noviembre, p. 17).

El Fiscal General de la República, Dr. Mauricio Eduardo Colorado, afirmó que el hallazgo de vainillas de fusil AK-47, de fabricación soviética, en el lugar de la masacre, podía interpretarse como un indicio de que el FMLN era el responsable. Cuando, días después, la testigo Lucía Barrera de Cerna aseguró que los asesinos vestían uniformes militares, el Fiscal replicó que ello no constituía indicio de nada "porque cualquier persona puede conseguir un uniforme militar" y opinó que "sería temerario" responsabilizar de la masacre a elementos del ejército. La Fuerza Armada aseguró que "bajo ninguna circunstancia participa en acciones encubiertas de

tipo criminal y que, por el contrario, su comportamiento está ceñido a las disposiciones de nuestra Constitución Política, de nuestras leyes secundarias y del respeto a los derechos humanos" (*El Diario de Hoy*, 18 de noviembre de 1989, p. 27).

El 18 de noviembre, el Dr. Colorado envió al Papa una carta en la cual le solicitaba que retirara del país a "algunos señores obispos, que fuera del contexto general de la política general de la Conferencia Episcopal de El Salvador, han persistido en mantener viva esa ideología cuestionable de la 'iglesia de los pobres'." De no retirárseles, sugería el Fiscal, sus vidas podrían correr la misma suerte que los jesuitas asesinados. Aunque la carta del Fiscal no mencionaba los nombres de tales obispos, *El Diario de Hoy* sí lo hizo. Se trataba, obviamente, de Monseñor Rosa Chávez, quien "tiene hermanos en la guerrilla," y de Monseñor Rivera, quien "ha asumido posiciones controvertidas." El Fiscal advertía la posibilidad de que "amén de los grupos subversivos, 'cualquier otra persona atente contra ellos' dado que 'gran parte de la población' considera a los curas de la 'iglesia popular' causantes de la violencia imperante actualmente" (*El Diario de Hoy*, 20 de noviembre de 1989, p. 3).

El arzobispado de San Salvador denunció con valentía, desde un principio, que todos los indicios circunstanciales de la masacre así como las declaraciones de los testigos apuntaban hacia efectivos de la Fuerza Armada. En su homilía dominical del 19 de noviembre, Monseñor Rivera subrayó que "hay una presunción vehemente de que los asesinos de los religiosos sean elementos de la Fuerza Armada o en íntima connivencia con ellos." Se inició así un curso de creciente confrontación entre el arzobispado y el Fiscal.

El 28 de noviembre, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado presentó el informe de los resultados de su propia investigación sobre la masacre. Su conclusión final era que "todas las evidencias e indicios en su totalidad y correlación establecen que los responsables del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y de las dos empleadas

de servicio fueron elementos militares pertenecientes a la Fuerza Armada."

En su homilía dominical del 10 de diciembre, Monseñor Rivera tuvo que aconsejar al Dr. Colorado que, dado el celo incondicional con que aparentemente defendía a los presuntos culpables en el caso de los jesuitas, haría mejor en renunciar al cargo de Fiscal y asumir formalmente la defensa judicial de los asesinos. A su vez, Colorado acusó a Monseñor Rivera y a Monseñor Rosa Chávez de "tratar de entorpecer el avance de la justicia" y solicitó a la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) que se investigara la participación de ambos obispos en el caso. Asimismo, acusó a la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, de los delitos de "fraude procesal" (art. 466 del Código Penal) y "encubrimiento real" (art. 471) por haber recogido del lugar de la masacre cuatro vainillas calibre 5.56 mm. (la comisión investigadora recogió 126 vainillas de este calibre y un centenar más de otros calibres).

No sólo el Fiscal tenía dificultades para aceptar que elementos de la Fuerza Armada estuvieran implicados en la masacre. También el presidente de la CEDES, Monseñor Romeo Tovar Astorga, declaró que no le parecía "lógico" que la masacre hubiera sido realizada por efectivos del ejército. Hasta Monseñor Pablo Antonio Vega, desde Miami, afirmó que según sus informaciones lo más probable era que el FMLN había cometido el asesinato.

La actitud parcializada del Fiscal no fue el único signo preocupante del curso que las investigaciones del gobierno tomaron inicialmente. Otra señal desesperanzadora fue el trato intimidatorio a que la principal testigo de la masacre, Lucía Barrera de Cerna, y su esposo, Jorge Alberto Cerna Ramírez, fueron sometidos en Miami por agentes del FBI a finales de noviembre. Lucía y Jorge Cerna vivían en Soyapango, con su hija Geraldina, de 4 años. Jorge trabajaba como panadero. Desde 1981, Lucía trabajaba como empleada de limpieza de la rectoría de la UCA y de la curia provincial jesuítica.

Soyapango fue uno de los sectores más golpeados durante la ofensiva guerrillera. El miércoles 15 de noviembre, la familia Cerna tuvo que evacuar el lugar bajo una bandera blanca. En busca de un sitio más seguro, Lucía telefoneó al P. Ignacio Martín-Baró, quien les ofreció una habitación de la antigua residencia jesuítica, ubicada en la casa N° 16 sobre la calle Cantábrico, en la colonia Jardines de Guadalupe. Los ventanales del norte de la casa dan a la parte posterior de la capilla. El P. Martín-Baró los ayudó a acomodarse y les consiguió algunas frazadas. En algún momento de la madrugada —ellos creyeron que sería alrededor de la una de la mañana—, Lucía y Jorge se despertaron al escuchar el estruendo de armas de fuego. Lucía creyó, inicialmente, que los balazos provenían del bosquecito localizado al oeste de la casa, en el interior de la UCA. También escucharon golpes y voces provenientes del Centro Monseñor Romero. Lucía se asomó a una ventana del cuarto contiguo, desde la cual tenía una vista parcial del corredor exterior de la residencia de los padres jesuitas. Jorge permaneció junto a Geraldina, preocupado porque fuera a despertarse y empezara a llorar, llamando la atención de los sujetos que habían ingresado al campus.

Espiando a través de las cortinas de la ventana, Lucía observó a cinco hombres quienes permanecían en la entrada de una de las puertas de acceso a la residencia. Tres de los sujetos estaban a la sombra, mientras que los otros dos quedaban iluminados por la luna. Lucía pudo apreciar que vestían uniformes militares de camuflaje y portaban fusiles y gorras con visera. En este mismo momento, escuchó la voz estentórea del Padre Martín-Baró: "¡Esto es una injusticia! ¡Ustedes son una carroña!" Luego oyó disparos, portazos y ruido de vidrios que se rompían, y vio a los hombres salir corriendo.

Volvió temblando a la habitación con mucho temor, y encontró a Jorge espiando a través de la ventana. El le contó que había visto a siete u ocho hombres caminando a paso rápido, pero sin correr, sobre la calle interna del campus en dirección a la salida que da a Jardines de Guada-

lupe. No los pudo ver bien, pero le pareció que vestían "uniformes oscuros de soldado" y gorras con visera; según confesaría días después, en ese momento los consideró "como soldados del ejército," ya que "toda la zona en la que estábamos estaba controlada por el ejército y porque ningún civil podía circular a esas horas debido al toque de queda."

Luego, ambos se volvieron a acomodar junto a Geraldina y trataron de conciliar el sueño. Despertaron con las primeras luces, hacia las cinco y media de la mañana. Al asomarse a la ventana de la habitación contigua, Lucía notó que la puerta de metal que conducía de la capilla hacia la residencia, la cual normalmente permanecía cerrada, estaba abierta. Poco después, mientras Lucía estaba en el baño, Jorge oyó que alguien tocaba en la ventana, llamando: "Padre, Padre." Al asomarse, encontró a cuatro vigilantes de la UCA, quienes creían que había algún sacerdote en la casa. Le contaron que habían escuchado "una gran balacera" cerca de donde ellos se encontraban, y que estaban vivos de milagro. Asimismo, le dijeron que habían visto unos bultos en el área del Centro Monseñor Romero.

Jorge acompañó a uno de los vigilantes a inspeccionar el área, seguidos de Lucía y de la niña. Al aproximarse a la residencia de los padres vio los cuerpos de la cocinera y de su hija de 15 años, y vislumbró la cabeza de uno de los sacerdotes asesinados. Lucía, al presenciar la escena, no quiso ver más y regresó a la casa con Geraldina. Jorge y el vigilante siguieron hasta el jardín de la residencia, donde encontraron los cadáveres de cuatro sacerdotes más. Al retornar Jorge a la casa, Lucía lo dejó con la niña y partió inmediatamente a avisarles de lo acontecido a los jesuitas de la residencia de Provincial, ubicada sobre la calle Mediterráneo, en la misma colonia. Les relató, sumida en llanto y considerablemente nerviosa, lo que había visto la noche anterior.

El mismo día, la familia Cerna empacó sus pertenencias y abandonó la antigua residencia jesuítica. Se trasladaron a la casa de unos

familiares, donde permanecieron hasta el domingo 19. El lunes 20, los combates parecían haber amainado y Lucía decidió retornar a su trabajo habitual en la UCA y la curia jesuítica. Acá, encontró al Padre Provincial José María Tojeira, quien le presentó a una señora a la que Lucía no conocía personalmente, pero cuyo rostro reconoció por haberla visto en televisión. Era la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández. El P. Tojeira le indicó que podía relatarle con toda confianza y libertad a María Julia lo que había visto o escuchado la noche de la masacre. Lucía lo hizo así, tras lo cual María Julia le indicó que, debido a lo que había presenciado, era conveniente solicitarle protección, y le preguntó si no tenía inconveniente en trasladarse a la embajada de España.

La familia Cerna se trasladó a la sede diplomática. El embajador les explicó que era necesario darles protección y seguridad hasta que pudieran ser transportados a España o Estados Unidos o al país que ellos eligieran. Luego fueron presentados al embajador francés, quien les planteó tres opciones de exilio: España, Francia o Estados Unidos. Ninguno de los dos había viajado nunca al exterior y se sentían muy contrariados por tener que abandonar el país. Optaron entonces por Miami porque sentían que ahí podían estar más cerca de El Salvador que en España o Francia.

En la tarde del miércoles 22, en una habitación de la embajada, Lucía rindió su declaración ante el Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora, encargado del caso. También estuvieron presentes María Julia Hernández; el Fiscal General, a quien Lucía reconoció por haberlo visto en televisión y miembros de la comisión investigadora de hechos delictivos. El juez le hizo varias preguntas. El Fiscal General no le hizo ninguna. No obstante, Lucía notó que el Dr. Colorado contrajo el rostro con una mueca de desagrado cuando ella afirmó que los sujetos que vio vestían uniformes militares. Posteriormente, el Fiscal afirmó que las declaraciones de

la testigo "no son concluyentes ni han dado mayores luces."

Por lo avanzado de la hora, la testigo no pudo concluir su declaración la tarde del miércoles, de modo que se acordó que la continuara a la mañana siguiente. Como el embajador español estimó que su sede no contaba con el personal de seguridad suficiente para garantizar la vida de Lucía en caso que fuerzas aliadas a los asesinos quisieran incursionar la embajada esa noche, la familia Cerna se trasladó a la embajada de Francia. En ésta se encontraba de visita el ministro francés de asuntos humanitarios, con un buen contingente de seguridad. Ahí, a tempranas horas del miércoles, Lucía completó su declaración judicial. Luego fueron acompañados al aeropuerto por los embajadores de Francia, España y Estados Unidos en medio de un considerable despliegue de seguridad, y partieron a Miami a bordo de un avión de la fuerza aérea francesa, que se encontraba estacionado en Belice. En el vuelo a Miami, la familia Cerna se encontró por vez primera con el asesor legal de la embajada norteamericana en San Salvador, Richard Chidester.

El embajador norteamericano en San Salvador, William Walker, se había comprometido a que funcionarios de su embajada acompañarían a la familia Cerna hasta Miami, donde la entregarían a los jesuitas de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas no cumplieron con lo acordado y entregaron a los esposos Cerna al FBI, cuyos agentes los sometieron a intensos interrogatorios por casi una semana. Según declaraciones posteriores de los esposos Cerna, los agentes del FBI les preguntaron insistentemente quién les había instigado a decir "esas mentiras" y cuánto les habían pagado los jesuitas para que las dijeran, a la vez que los amenazaron con deportarlos. Cuando uno de los agentes le preguntó a Lucía si era una espía de los jesuitas y si uno de los sacerdotes era guerrillero, ella rompió a llorar y por miedo decidió retractarse de su testimonio. Los medios de prensa interesados en encubrir a los asesinos no desaprovecharon la

oportunidad para insinuar que el testimonio de Lucía había sido una patraña montada por los propios jesuitas para desprestigiar a la Fuerza Armada. El propio presidente Cristiani anunció el 10 de diciembre que la testigo había fallado seis veces en el detector de mentiras. Fue sólo hasta el 3 de diciembre que la familia Cerna pasó al cuidado de los jesuitas.

Paulatinamente, la verdad empezó a relucir. El 10 de diciembre, Monseñor Rivera denunció los "tormentos psicológicos" a que Lucía había sido sometida en Miami. En su edición del 18 de diciembre, el *New York Times* recogió ampliamente declaraciones de los esposos Cerna sobre el trato intimidatorio y vejatorio a que fueron sometidos. El Departamento de Estado reaccionó airado a las acusaciones. El portavoz de la Casa Blanca subrayó que "no creemos de ninguna manera en esas versiones." El Departamento de Estado negó "absoluta e inequívocamente cualquier acusación de que funcionarios estadounidenses maltratasen a la testigo." La Conferencia Jesuita y las Asociaciones de Universidades y Colegios Jesuitas de Estados Unidos solicitaron al Comité de Abogados para los Derechos Humanos entrevistar a la testigo y elaborar un informe evaluativo de su testimonio y de la utilidad de éste para el proceso judicial del crimen. El comité delegó tal tarea en Scott Greathead, miembro de su cuerpo de directores y primer asistente del fiscal de Nueva York, y en Martha Doggett, coordinadora del programa del Comité para América Latina y el Caribe. Ambos entrevistaron a la testigo el 3 de diciembre en Miami y los días 9 y 10 del mismo mes en otra localidad a donde fue trasladada junto con sus familiares bajo el cuidado y la protección de los jesuitas.

El informe de los abogados empieza con una descripción de la ubicación de la UCA y de la militarización prevaleciente en sus inmediaciones los días previos a la masacre, así como del cateo que efectivos del batallón Atlacatl efectuaron el lunes 13 en la residencia de los padres y en el Centro Monseñor Oscar Romero. No obstante, el informe se centra en el trato intimidatorio a que

el FBI sometió a los esposos Cerna (ver *Proceso 413*). A su arribo a Miami, la familia Cerna fue introducida a las autoridades de inmigración por representantes del Departamento de Estado. Fueron trasladados sucesivamente a diferentes hoteles, hasta quedarse en el *Hotel Raddison*, cerca del aeropuerto de Miami. La familia permaneció bajo el control del Departamento de Estado desde el jueves 23 de noviembre hasta el domingo 3 de diciembre. Durante los primeros cuatro días, permanecieron en el hotel mencionado. Diariamente, desde el lunes 27 hasta el jueves 30, tanto Lucía como Jorge fueron sometidos a largos e intensos interrogatorios y estuvieron incomunicados en una oficina del FBI en Miami. Fueron interrogados por dos agentes del FBI de apellidos Sánchez y Rivero y por el teniente coronel Manuel Rivas Mejía, miembro de la Comisión investigadora de hechos delictivos de El Salvador. Al tercer día de interrogatorios, Lucía, quien ya para entonces se encontraba asustada e intimidada por el tono áspero y vejatorio de aquéllos, concluyó que los investigadores no creían en su testimonio. Entonces decidió cambiarlo y les indicó que no había visto nada la noche de la masacre. Fue a esa altura cuando se le sometió a una serie de pruebas poligráficas, las cuales indicaron que mentía. Al día siguiente, jueves 30, también su esposo fue sometido al polígrafo, con resultados similares.

En la tarde del día 30, luego que Lucía había cambiado su testimonio, el Departamento de Estado comunicó a los jesuitas que ya podían recoger a la familia Cerna. El 2 de diciembre, los padres Paul Tipton y Joe Berra volaron a Miami, para reunirse con ellos. El domingo 3, el Departamento de Estado les entregó formalmente a los Cerna.

El domingo 3 de diciembre, Monseñor Rosa Chávez denunció la existencia de "signos de un clima de persecución" contra diversos sectores de Iglesia y organismos humanitarios, adelantando una rápida interpretación teológica de tal situación: "La Iglesia católica y otras iglesias históricas han experimentado a la par del pueblo inerme e indefenso la sombra de la cruz y la

incomprensión que en algunos casos toca los límites de una verdadera persecución.”

La masacre de los jesuitas fue el caso paradigmático de esa campaña persecutoria, pero las denuncias de hostigamientos y capturas contra iglesias y religiosos fueron innumerables. En la noche del día 15, sujetos uniformados entraron en la Iglesia Luterana “La Resurrección,” del barrio San Miguelito, y detuvieron a doce miembros de la congregación, a quienes condujeron a la Policía de Hacienda. En las mismas circunstancias, la Fuerza Armada cateó las instalaciones de la Iglesia Emmanuel, ubicada en el barrio San Jacinto. Tanto el obispo Medardo Gómez como el Reverendo Edgar Palacios, coordinador del Comité Permanente del Debate Nacional, debieron abandonar el país tras recibir numerosas amenazas de muerte en los días previos.

El 20 de noviembre, efectivos de la Segunda Brigada de Infantería capturaron al sacerdote dominico español Miguel Francisco Andueza Aramburu (39 años). Según la versión de *El Diario de Hoy*, el P. Andueza fue capturado en la finca *Maracay*, en las faldas del volcán de Santa Ana, por transportar víveres y medicinas para el FMLN: “el cura mostró ‘embutidos’ que contenían instrumentos médicos, municiones, gases, ropa y abundante literatura marxista, algunos de ellos titulados ‘Revolución en América’” (*El Diario de Hoy*, 22 de noviembre de 1989, p. 20). Posteriormente, el delegado provincial de los dominicos de Centroamérica para asuntos de El Salvador, P. Gregorio Ramírez, explicó que el P. Andueza, dedicado a proyectos de desarrollo comunal, fue capturado cuando se presentó en el cuartel de la Segunda Brigada para inquirir por el paradero de un conocido suyo, de quien supo que había sido capturado cuatro días antes. En la guarnición se le indicó que “también debía quedarse para ser investigado porque había acusaciones contra su persona; y así fue como quedó detenido.” Tras ser investigado en Santa Ana y luego remitido a la Policía de Hacienda en San Salvador, el P. Andueza fue puesto en libertad, “por no haberle encontrado mérito para su con-

signación.” Aunque no se le probó ninguna vinculación con el FMLN, debió abandonar el país, por razones obvias.

Una semana después, el día 30 de noviembre, efectivos de la Policía de Hacienda allanaron el centro parroquial de Ciudad Credisa (San Salvador), donde detuvieron a otro dominico español, el P. Carlos Díez Rojo, quien se hallaba de visita en el país, así como a cuatro colaboradores salvadoreños de la parroquia, y a un cooperante norteamericano.

El 25 de noviembre fue capturada la norteamericana Jennifer Casolo (28 años), bajo los cargos de “subversión, asociación ilícita y tenencia de armas de guerra.” Según las acusaciones castrenses, el ejército le habría encontrado enterrado en el jardín de su residencia, en la colonia Miralvalle, un importante arsenal de armas para el FMLN y abundante “documentación subversiva.” Otro caso similar fue el de la cooperante italiana María Gabriela Tornago (32 años), capturada en la colonia Prados de Venecia (Soyapango), junto con otros dos presuntos colaboradores del FMLN, bajo la acusación de montar una boda ficticia para encubrir en dicho sector los preparativos de la ofensiva guerrillera. Los familiares de María Gabriela denunciaron, el 30 de noviembre, en Padua, que la joven no fue detenida el 20 de noviembre, como lo informó la prensa, sino el día 11. “La embajada de Italia —explicaron— recibió la noticia doce días después y en este intervalo de tiempo (Gabriela) ha permanecido arrestada en el cuartel de la Policía de Hacienda, como una desaparecida, y torturada como todos los detenidos salvadoreños.” La familia Tornago responsabilizó de los atropellos sufridos por Gabriela al coronel Heriberto Hernández, director de dicho cuerpo de seguridad.

El 29 de noviembre, en Washington, Josephine Beecher (37 años), colaboradora de la Iglesia Episcopal de Juan Evangelista, en San Salvador, denunció los maltratos recibidos en la Policía de Hacienda tras ser capturada el 20 de noviembre bajo la acusación de ser una “terrorista delincuente” y “colaborar con la ofensiva” del

FMLN. La víctima aseguró que, después de haber sido torturada, fue obligada a firmar un papel en el que decía que había sido bien tratada. Según Josephine, el propio vicecónsul norteamericano en San Salvador, David Ramos, le habría aconsejado que lo hiciera así si quería quedar en libertad. Asimismo, denunció que efectivos policiales la despojaron de sus lentes y su reloj ante la presencia de Ramos, y luego la condujeron a otro cuarto, donde le taparon los ojos, le esposaron las manos y la golpearon en la cabeza, mientras el vicecónsul "tomaba café con un coronel." En relación a la denuncia, la portavoz del Departamento de Estado afirmó que no creía la versión de Josephine sobre el comportamiento del vicecónsul, pero aseguró que Estados Unidos había protestado al gobierno salvadoreño por el incidente.

El 1 de diciembre, el director general de la Guardia Nacional, coronel Juan Carlos Carrillo Schlenker, informó que dicho cuerpo había capturado a 15 miembros de la asociación "Concientización para Recuperación Espiritual y Económica del Hombre" (CREDHO), de la Iglesia Episcopal, entre ellos estaba el pastor Luis Serrano Lorente, de origen español pero nacionalizado salvadoreño, quien fungía como director de CREDHO. Se les acusaba de haber participado en los preparativos de las catapultas con que el FMLN atacó el 30 de octubre las instalaciones del Estado Mayor.

El 5 de diciembre, la organización humanitaria "Médicos sin fronteras," con sede en París, denunció que el ejército había cateado una de sus casas en San Salvador mientras otras "permanecen bajo custodia." Afirmaron conocer que el cateo se hizo "por órdenes expresas del Estado Mayor."

En total, durante el período comprendido entre el 11 de noviembre y el 15 de diciembre, el ejército capturó a 49 trabajadores de iglesias e hizo 61 cateos en 47 templos, clínicas parroquiales, e instalaciones eclesiásticas y de ayuda humanitaria.

El intenso clima persecutorio contra los

sectores de Iglesia y organismos humanitarios generó pronto un amplio movimiento de solidaridad internacional. ARENA, cuya imagen en el exterior nunca ha sido halagüeña, desplegó especiales esfuerzos para negar la existencia de esta persecución religiosa. El 22 de noviembre, el canciller José Manuel Pacas aseguró en Colonia, a la *Voz de Alemania*, que "es absolutamente falso" que se persiga a los opositores y menos a los ministros de culto religioso. "La Fuerza Armada —explicó— sólo cumple con el mandato constitucional de salvaguardar el orden y devolver la tranquilidad a toda la ciudadanía del país, que ha sido interrumpida por la fanática agresión de la subversión comunista."

Por su parte, el presidente Cristiani, en conferencia de prensa ofrecida el 1 de diciembre, admitió que algunas iglesias "han sido cateadas o investigadas por elementos de la Fuerza Armada" a raíz de informaciones "algunas veces falsas y otras correctas," pero negó que existiese una política persecutoria sistemática contra las iglesias. A partir de la primera quincena de diciembre, el gobierno envió siete misiones diplomáticas a quince países, para "contrarrestar la desinformación internacional" sobre El Salvador. Una de esas delegaciones, encabezada por el Ministro de la Presidencia, coronel Martínez Varela, fue recibida el 14 de diciembre en la curia generalicia de la Compañía de Jesús, en Roma, por los padres Alvaro Restrepo y Giuseppe Pittau. Un día después, la delegación fue recibida por el Papa en audiencia privada.

La carta que el Fiscal mandó al Papa, solicitándole el retiro de los obispos de la arquidiócesis, fue especialmente dañina para el propio gobierno, como beneficiosa para la Iglesia. Monseñor Rivera comentó que, gracias a la ocurrencia del Dr. Colorado, "nunca habíamos tenido tanta solidaridad ni tanto apoyo como ahora, desde el Sumo Pontífice hasta las conferencias episcopales." El 20 de noviembre, el encargado de la oficina informativa de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, comentó que "no se entiende cómo el mencionado Fiscal General ha dado publicidad a su carta antes de que llegase al

Santo Padre." La radio Vaticano denunció las "oscuras intimidaciones" contra los obispos y expresó su admiración por el "coraje en estos momentos dramáticos de los hombres de Iglesia, en particular del arzobispo de San Salvador." Incluso el Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Sagrada Congregación para la Defensa de la Fe, en un encuentro con la prensa sostenido la tarde del 21 de noviembre, enfatizó que la Iglesia "no puede aceptar tales amenazas." "No cedamos ante la violencia. Es condenable y debe ser condenado totalmente el recurso a estos medios para conseguir determinados objetivos," añadió el Cardenal.

El 25 de noviembre, el arzobispo de Los Angeles, Monseñor Roger Mahoney, viajó a El Salvador con 20 mil kilos de alimentos, medicinas y equipo médico y 100 mil dólares en efectivo, para socorrer a las víctimas del conflicto, a la vez que actuó como portador de cartas de solidaridad de otros 13 arzobispos y 8 obispos norteamericanos. En declaraciones a la prensa, Monseñor Mahoney desmintió categóricamente que la Iglesia católica salvadoreña fuese aliada del FMLN y atribuyó las acusaciones en su contra a su opción preferencial por los pobres.

El 30 de noviembre, el Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) emitió un mensaje, suscrito por 42 obispos, en el cual expresaba que "si bien es cierto que en todos los países del área existen focos de tensión, nos duele especialmente el enorme sufrimiento, la muerte y la destrucción que está significando para la República de El Salvador la escalada violenta de la lucha armada que se viene padeciendo desde hace mucho tiempo... Nos duele de manera especial que, entre las víctimas del odio exacerbado, se encuentren seis sacerdotes jesuitas que, desde la cátedra universitaria, trataban de formar conciencias justas en los futuros constructores de la sociedad. La forma brutal en que fueron masacrados, junto con la humilde trabajadora doméstica y su hijita, pone de manifiesto hasta dónde han descendido el sentido moral y la calidad humana de los autores intelectuales y materiales de tan execrable crimen."

El 6 de diciembre, el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos solicitó al Congreso suspender la ayuda a El Salvador e instó a elaborar "una política estadounidense clara que apoye decididamente una solución negociada y una postura firme que asegure el respeto al principio de los derechos humanos por parte del gobierno salvadoreño."

La presión moral de las iglesias empezó a traducirse en una importante presión política. El 21 de noviembre, el senado norteamericano aprobó una resolución, en la cual "deplora y expresa su fuerte repulsa por el execrable asesinato de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras" y "reafirma su dedicación y apoyo en favor de los derechos humanos y las instituciones democráticas en El Salvador." Dos días después, el parlamento europeo, en una resolución común a todos los grupos políticos que lo integran, exceptuada la extrema derecha, se declaró "profundamente preocupado e indignado por la brutalidad de los escuadrones de la muerte que aprovechan la situación de guerra para perpetrar actos sin escrúpulos" e instó al gobierno salvadoreño a suspender los bombardeos sobre zonas habitadas por población civil. El gobierno alemán congeló la ayuda destinada a El Salvador. El propio presidente Richard Von Weizsaecker habría intervenido para que el gobierno salvadoreño respetara la vida de los luteranos detenidos tras la ofensiva. El 30 de noviembre, en Roma, 81 diputados italianos de diversas fracciones interpellaron al presidente Giulio Andreotti sobre las gestiones de su gobierno en relación al caso de Gabriela Tornago. El 18 de diciembre se reunieron con Cristiani los senadores demócratas Bob Graham (Florida) y Dennis Deconcini (Arizona), quienes afirmaron que Estados Unidos mantendría la ayuda sólo si el gobierno investigaba seriamente el asesinato de los jesuitas. Deconcini indicó que "si el ejército estuviera comprometido, sí se podría cortar la ayuda, pero me sorprendería que líderes militares fueran los responsables."

Las presiones internacionales empezaron a surtir efecto. El 11 de diciembre fue liberada y

deportada María Gabriela Tornago. Dos días después, también lo fue Jennifer Casolo. El Juzgado de Primera Instancia de lo Militar declaró que carecía de "suficientes pruebas" para confirmar su detención. El presidente Cristiani afirmó que estaba convencido "moralmente" de la culpabilidad de la Casolo, pero manifestó que respetaba la decisión judicial. El vocero del Departamento de Estado negó que Estados Unidos hubiese presionado para que se la liberara al margen de los procedimientos legales y afirmó que "tratamos de asegurarnos del bienestar de la norteamericana, de que no hubiese malos tratos y de que tuviese un proceso legal justo."

El día 14, al llegar a Nueva York, Jennifer declaró que "en El Salvador no hay justicia... no puedo sentirme libre mientras son acusadas otras personas, mientras en El Salvador se sufre con la guerra." También denunció que durante su detención fue interrogada por una mujer, quien le afirmó: "aquí no tienes derechos" y le advirtió que tenía permiso "para hacer lo que quisiera con ella." Por las noches escuchaba cómo golpeaban y torturaban a los otros detenidos. Por otra parte, admitió que había enterrado algunas cosas personales, como cassettes y libros, en el jardín de su residencia, debido a los estrechos criterios imperantes en el ejército salvadoreño sobre lo que es literatura "comunista," pero negó que hubiese tenido armas. El 15 fue recibida en su ciudad natal de Thomaston (Connecticut) por el senador Dodd, así como por numerosos familiares y amigos. Declaró que "en El Salvador apoyar a los pobres es considerado equivalente a apoyar a la guerrilla", y citó numerosos casos de persecución a trabajadores de iglesias y de organismos humanitarios. "Yo sólo he sido una de tantos; la diferencia es que yo tengo muchos amigos," declaró.

La misma noche en que fue perpetrada la masacre de la UCA, el ejército cateó las casas de varios dirigentes sindicales y del movimiento popular, pero éstos, a diferencia de los jesuitas, parecían haber previsto una maniobra de esa índole y se encontraban refugiados en otros sitios.

Aparentemente, la idea era descabezar de un solo golpe a toda organización considerada por la propaganda gubernamental como "fachada" del FMLN. Durante el período comprendido entre el 11 de noviembre y el 15 de diciembre, el movimiento laboral informó de ocho asesinados, dos desaparecidos y 76 capturados afiliados a 41 organizaciones sindicales.

Aparte de los bombardeos de la Fuerza Armada sobre diversos barrios populares, la represión contra la población civil ha sido poco documentada. Es importante destacar, como un caso ilustrativo de los excesos con que el ejército procedió en ciertos sectores, la masacre de Cuscatancingo, perpetrada apenas dos días después del asesinato en la UCA (ver *Carta a las Iglesias* No. 200). Walter y Raúl Zetino, Oscar López, José Crespín, Jorge Campos y Raúl Castro no eran sacerdotes o académicos conocidos internacionalmente. Eran vecinos del pasaje El Gringo, en Cuscatancingo. Estaban platicando cuando pasó por el lugar una patrulla de la Fuerza Armada. Sin mayores contemplaciones, los efectivos consideraron que eran subversivos y los acribillaron. Emanuel Medrano, de 14 años de edad, ni siquiera era del vecindario. Su madre declaró que él había salido buscando algún lugar para comprar pan. Pasaba por el pasaje cuando tropezó con la ejecución sumaria. Los soldados también lo acribillaron. Como su familia no tenía los 225 colones para un entierro adecuado, fue sepultado al final del pasaje.

"Ellos no eran guerrilleros," dijo el entrenador del equipo de fútbol local en el cual tres de los asesinados jugaban. "Tenían trabajo, familias. Todo el mundo por aquí los conocía. Un guerrillero no tiene tiempo para trabajar, atender a su familia y jugar fútbol." Tres de los seis eran jornaleros. Uno trabajaba en una fábrica de cristal y otro en la cervecería *La Constancia*. López, un inmigrante ilegal en Los Angeles, camarero de 23 años, había llegado sólo dos semanas antes para visitar a sus viejos amigos del vecindario.

La persecución contra los partidos políticos de oposición fue también intensa. Los dirigentes del

MNR, Guillermo Ungo y Héctor Oqueli, debieron asilarse en la embajada de Venezuela. Rubén Zamora buscó resguardo temporal en la de México. La residencia de Ungo fue cateada sucesivamente por la Policía Nacional, la Primera Brigada de Infantería y la Guardia Nacional. El Ing. Jorge Villacorta, dirigente del MPSC, fue capturado en el aeropuerto el 6 de diciembre, cuando regresaba de México; fue liberado horas después, tras haber sido golpeado en la Policía Nacional y amenazado para que abandonara definitivamente el país. Ni siquiera el PDC se vio libre de hostigamientos del ejército. El 8 de diciembre, efectivos de la Primera Brigada de Infantería catearon la residencia del Dr. Eduardo Colindres, a quien habrían intentado capturar.

En la plenaria legislativa del 24 de noviembre, los diputados de ARENA aprobaron diversas reformas a la legislación penal y procesal penal para reforzar jurídicamente la lucha contra el "terrorismo." El día 27, el MNR condenó la aprobación de las reformas, denunció el "ambiente guerrillero y persecutorio," desatado contra los partidos de oposición y los sectores democráticos, y deploró el cierre de "los espacios para el diálogo, la tolerancia, el libre juego de las ideas y el ejercicio legítimo de las libertades democráticas." El 3 de diciembre, Monseñor Rosa Chávez opinó que "es motivo de gran preocupación el establecimiento de leyes antiterroristas que se prestan a groseros abusos de poder en orden a aniquilar a los opositores." El 4 de diciembre, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, con sede en Ecuador, acusó al gobierno salvadoreño de ampararse en la crisis "para perseguir a líderes religiosos, políticos y dirigentes civiles no directamente involucrados en el conflicto armado."

El cierre de los espacios de disensión política incluyó también un severo amordazamiento de la prensa. El 22 de noviembre, el noticiero *Al Día*, del Canal 12, optó por abandonar el aire, antes que someterse a la censura burda del CIN. Los rotativos más progresistas, como *El Mundo* y *Diario Latino*, sufrieron también fuertes presiones

del CIN. Los noticieros radiales independientes fueron suspendidos. Las corresponsalías de varios medios de prensa internacional fueron advertidas acerca del contenido de sus informaciones; varios periodistas, entre ellos el corresponsal de ACAN-EFE, sufrieron cateos domiciliarios y tuvieron que abandonar el país. En un primer momento, el CIN llegó al extremo de interferir hasta los servicios internacionales de cable por televisión. Las primeras noticias sobre la masacre de la UCA fueron bloqueadas sistemáticamente. El 26 de noviembre, Monseñor Rosa Chávez solicitó al gobierno que permitiera una información "libre, objetiva e independiente."

Al igual que negó que hubiera persecución religiosa, el gobierno desmintió que estuviera coartando la libertad de la prensa. El 1 de diciembre, el presidente Cristiani aseguró que el gobierno y la Fuerza Armada garantizan "el libre ejercicio de la profesión." Cristiani admitió que "hay restricciones legales en cuanto a la transmisión de algún tipo de noticias en el país," pero prometió que las restricciones se levantarían gradualmente a menos que "el FMLN continúe agrediendo," en cuyo caso "habrá que analizar la situación de la prensa."

Aun cuando la etapa más beligerante de la ofensiva cedió paso al repliegue del FMLN, la ferocidad de la persecución gubernamental contra los sectores de la oposición no amainó significativamente. El 10 de diciembre, la Policía Nacional detuvo a Víctor Armando Martínez y a Carlos Ernesto Morales Carbonell ("Tato"), este último hijo del dirigente del PDC, Dr. José Antonio Morales Ehrlich, bajo la acusación de tenencia de armas, documentación subversiva y almacenamiento de medicinas. El día 14, efectivos de la Policía de Hacienda capturaron a Vilma Ibarra, hermana de Salvador Ibarra, abogado defensor de Jennifer Casolo, junto a otras dos personas. El 16 de noviembre había sido capturado, por varias horas, el propio Salvador Ibarra.

También el FMLN dio su aporte a la vorágine de la violencia terrorista. El 28 de noviembre, comandos urbanos ametrallaron el vehículo en

que se conducía el Dr. Francisco José Guerrero, dirigente del PCN y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue alcanzado por 18 balazos. También resultó muerto uno de los atacantes, al enfrentarse con una patrulla de la Policía Nacional, y fueron heridos dos guardaespaldas del Dr. Guerrero. Un portavoz del FMLN rechazó las acusaciones desde San José; posteriormente, la comandante Ana Guadalupe Martínez aceptó la responsabilidad de los comandos urbanos, calificando la acción como "un error."

Aunque el clima de polarización suscitado tras la ofensiva crispó los ánimos en contra del proceso de diálogo entre el gobierno y el FMLN, por otra parte, inspiró nuevas gestiones en favor de una solución política al conflicto. Paradójicamente, las primeras voces en favor de tal iniciativa provinieron de Estados Unidos. El 21 de noviembre, el senado aprobó una resolución solicitando la mediación de la ONU y la OEA para que el gobierno salvadoreño y el FMLN pactaran un "inmediato cese al fuego." La portavoz del Departamento de Estado declaró que el presidente Cristiani "debe evaluar cualquier oferta de cese de las hostilidades para poner fin al derramamiento de sangre."

El 9 de diciembre, Cristiani propuso la reanudación del diálogo a partir del 20 de ese mes, a condición de que el FMLN cesara sus "acciones terroristas contra la población civil." Los días 10 y 11 de diciembre, los mandatarios centroamericanos celebraron su sexta reunión cumbre en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), ubicado en la localidad de San Isidro de Coronado, a siete kilómetros de San José, Costa Rica. En la declaración de trece puntos, suscrita al final del encuentro, los mandatarios expresaron su "apoyo decidido" al gobierno salvadoreño como producto de un "proceso democrático, pluralista y participativo" y respaldaron el "reiterado propósito" de Cristiani de "encontrar una solución al conflicto

salvadoreño por medios pacíficos y democráticos." Asimismo, demandaron "en forma enérgica al FMLN que renuncie públicamente a todo tipo de acción violenta que afecte directa o indirectamente a la población civil;" solicitaron la mediación del secretario general de la ONU para propiciar la reanudación del proceso de diálogo en El Salvador y recomendaron a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) iniciar acciones para la desmovilización del FMLN. Por otra parte, los presidentes dieron su respaldo a Daniel Ortega para que los fondos aprobados por Estados Unidos para los contras fuesen entregados a la CIAV para su desmovilización y reubicación. Finalmente, instaron a la ONUCA a acelerar sus actividades para evitar el suministro de armas al FMLN y a los contras.

La declaración de San Isidro de Coronado representó un importante espaldarazo para Cristiani. El FMLN criticó airadamente el documento, lo cual no hizo sino favorecer la manipulación propagandística del mismo por parte del gobierno salvadoreño. El 14 de diciembre, el Ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios, opinó que los acuerdos de Coronado "son una alternativa política para la incorporación de la insurgencia salvadoreña al proceso democrático," a la vez que expresó que el FMLN "se vuelve dogmático al no reconocerlos."

El 19 de diciembre, el canciller Pacas Castro anunció que "se le ha hecho un llamamiento" a Pérez de Cuéllar "para que trate de convencer al FMLN a reanudar el diálogo," pero el FMLN debe "hacer público un cese de hostilidades." Ese mismo día, la representación del FMLN en México rechazó "el manoseo que el régimen salvadoreño hace de los acuerdos de San Isidro" y reafirmó su postura de suspensión del diálogo. El año concluyó sin que los intentos de mediación desplegados por el presidente Carlos Andrés Pérez ante el FMLN tuvieran éxito.